Imprimir

La Corte Suprema de Justicia ha anunciado que investigará a cerca de 200 congresistas supuestamente “enmermelados”. Las consecuencias de esta investigación están lejos de conocerse y, mucho menos, imaginarse. Esto se cruza con las investigaciones contra los diversos carteles judiciales, la corrupción por obra de Odebrecht, el tema de los falsos testigos, etcétera. Cualquiera que revise las noticias de los últimos años, que podría remontarse al proceso 8000 o más atrás, tendría un triste panorama. El diagnóstico: corrupción campante.
A esto le podríamos sumar los escandalosos proyectos de reforma electoral, así como la también escandalosa incapacidad para reformarla y, peor aún, el que desde 1985 no se haya adoptado legalmente ninguno de los censos realizados. Así, tenemos otro diagnóstico: resistencia al cambio.

Es muy difícil indagar sobre las causas de la corrupción campante. Algunos señalarán que estamos ante la pérdida de valores y que es necesario un nuevo pacto ético. Es muy probable que exista algo de eso. La cultura mafiosa, el “usted no sabe quién soy yo”, la fascinación (y legitimación) social por el milagrito de lograr enriquecerse rápidamente, junto a la mediocridad, el oportunismo (no dar papaya y a papaya partida…) y el cortoplacismo, pueden explicar algunas de estas cosas. El valor del trabajo bien planeado y bien ejecutado es bastante bajo en nuestra sociedad. Pero no es todo.

Debemos preguntarnos si no existen estructuras institucionales que favorecen la corrupción. Algunas se han identificado y enfrentado. Por ejemplo, el modelo de pagos en la contratación pública generaba incentivos para el accionar corrupto y se han intentado enfrentar. Pero a cada solución surge una nueva modalidad. El sistema va a la zaga.

La mermelada o los cupos indicativos o, como quiera que se llamen, existen por una razón sencilla: irresponsabilidad. No se trata de la responsabilidad civil, penal o administrativa. Eso es una cuestión accesoria. Es más complejo. Estamos frente a irresponsabilidad política. Igual ocurre con la judicatura, que se enfrenta a una irresponsabilidad profesional.

La irresponsabilidad política de la que hablo es aquella en que no existe un incentivo para que al gobernante le vaya bien. Tomemos a los presidentes, gobernadores y alcaldes de este país. Son elegidos, ya no por partidos sólidos y bien organizados, sino por endebles coaliciones de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Normalmente el apoyo electoral que recibe, no se refleja en el apoyo parlamentario, asambleísta o concejal que recibe. De hecho, muchas veces esa coalición ganadora no es la misma que lo soporta en el poder.

Pues bien, se tiene, entonces, a un líder solitario. Que puede ser bueno o malo; capaz o inepto. No importa. Es solitario, porque su suerte no está atada a la de nadie. Antes bien, si pierde capacidad de gobierno (gobernabilidad), hay una importante oportunidad para los congresistas, los miembros de las asambleas o del concejo para que ellos impongan la agenda o, en la realidad, chantajeen al gobernante, a fin de lograr la gobernabilidad.

Pues este es el escenario que tenemos. Una resistencia al cambio, debido a que el modelo existente favorece, alienta, anima y alimenta la corrupción. El líder solitario no es más que un malabarista que juega a evitar que los intereses particulares de los que lo soportan, de quienes le aseguran gobernabilidad, se alineen en su contra. El remedio: la mermelada.

Pero lo más terrible de todo, no es que la mermelada funja como medio para asegurar la gobernabilidad. Lo grave es que la sociedad se acomodó a ello. Es funcional a ella y ella lo demanda. Como siempre, la incapacidad de todos para proponer y enfrentar los problemas se soluciona con “papá gobierno”. Las regiones, antes que proponer soluciones para sus dificultades, esperan que se dé el milagrito, por vía del congresista. ¿Cuántas entidades territoriales han ajustado sus sistemas de recaudo para no depender del gobierno nacional? ¿Cuántos sistemas prediales están actualizados? ¿Cuántos latifundios pagan lo que deben? ¿Cuántas empresas el impuesto de industria y comercio? ¿Cuántos municipios o departamentos piensan soluciones para enfrentar sus necesidades?

Pocos. Podemos contar con las manos aquellos que lo intentan. Algunos, con notable éxito. Pero la mayoría, pidiendo limosna. Podrían decir que el sistema no les favorece, pero

tampoco hacen mucho para demandar un ajuste. Así, son igualmente irresponsables, pues la cosa pública, el interés colectivo, está lejos de sus mentes.

No es un tema nuevo. Desde que lo público se expuso y se reconstruyó como el mal de todos los tiempos, que debe ser desmantelado en favor de la iniciativa privada (pues ésta se ve ahogada), lo único que se ha logrado es privatizar lo público. Esto es, permitir que el interés privado sea el motor de lo público. Privatización que opera en dos niveles. En el macro, de manera que el interés colectivo esté medido por el beneficio privado. Así, la inversión pública en una determinada región se determina según el beneficio económico que se obtenga… para algunos. En el micro, de la misma manera. Así, la inversión pública sólo será promovida según el beneficio económico o electoral que se logre. Ante esto, ¿qué más funcional que la mermelada?

Pues bien, ¿qué le pasará al régimen con la apertura de investigación de 200 congresistas? Nada. Simplemente todo seguirá igual. Algunos caerán, debido a que “dieron papaya” y “los pillaron”. De malas ellos. Eso es todo. La sociedad ¿reaccionará? Tampoco. Pues es funcional. El ciudadano urbano metido de lleno en su día a día, alejado del acontecer político y los proyectos estatales. Sufriendo la ausencia de planeación y soportando la improvisación. Qué más da. Pocos esperan, por ejemplo, que el metro de Bogotá sea una realidad para las generaciones existentes. Seguro lo verán los nietos, se dice. El ciudadano alejado de las grandes urbes, por su parte, seguirá sujeto al vaivén de los políticos de turno. No concibe un futuro sin mermelada, pues de ella también se unta. No de otra manera ve un mejor porvenir.

Entonces, cuando se niega legitimidad al régimen, ¿qué se está diciendo? No se niega que la gente valora lo que hace el Estado. De hecho, la gente lo demanda. Lo que se cuestiona es que el camino para cumplir sus funciones, el medio para que se articulen las necesidades sociales y las iniciativas estatales. Se cuestiona que el medio sea la mermelada, la corrupción. Se espera que el sistema libere a la persona de su penosa búsqueda de soluciones para enfrentar sus condiciones de vida y que sus reclamos sean realmente escuchados.

¿Cuál es el camino? La violencia se ha ensayado como medio. No son 50 años de guerra, sino 200 o más. ¿Qué se ha logrado? Nada. Reforzar el régimen de la mermelada. Tanto la violencia de la derecha como el de la izquierda no han hecho más que favorecer este modelo. Así, el mejor amigo de los violentos, el populista y el mejor amigo de los populistas, los violentos. El mejor amigo del corrupto, el mediocre y viceversa.

Pero nada nos impide soñar. Soñar con que la Fiscalía General de la Nación acuse, basado en evidencia y que la justicia, juzgue en derecho. Como dicen, “soñar no cuesta nada”. Lo mejor de todo, es que no se necesita mermelada para ella.

Una acotación final. La base de la mermelada es el azúcar.

HENRIK LÓPEZ